

Publicat el 12-5-2013 en "Levante - EMV".

Privatización de los servicios de agua: ¿austeridad o negocio?

Pedro Arrojo Agudo *

La estrategia neoliberal del Banco Mundial y del Banco Central Europeo pretende reducir el campo de acción de la función pública para dejar más espacio de negocio a la iniciativa privada. Una estrategia que viene degradando las funciones del Estado, como impulsor de valores de justicia y cohesión social, desmontado los endebles servicios públicos en países empobrecidos y desmontando el llamado estado del bienestar en los más desarrollados.

Tras un largo proceso de "anorexización" de las instituciones públicas y glorificación del "libre mercado", se promueven políticas desreguladoras y privatizadoras. Debilitados en sus capacidades financieras, Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos se ven empujados a "vender los muebles", privatizando los servicios bajo su responsabilidad.

Desde este enfoque, garantizar el acceso universal a servicios básicos, como los de sanidad, educación o agua y saneamiento, tradicionalmente asumidos como derechos de ciudadanía, e incluso como derechos humanos, se considera un atentado contra el libre mercado, promoviendo que los gestionen empresas privadas, como simples negocios, al tiempo que los ciudadanos pasan a ser clientes que sólo accederán a ellos si pueden pagarlos.

En Chile, bajo la dictadura de Pinochet, se ensayaron las opciones más radicales del naciente neoliberalismo en materia de aguas, privatizándose los ríos. De hecho, si alguien necesita una concesión de aguas en Chile, hasta hace poco tenía que viajar a Madrid y hoy debe ir a Roma para comprársela a Endesa, propietaria efectiva de buena parte de los ríos chilenos.

La Sra. Thatcher privatizó las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, entregando, por ejemplo, la red de abastecimiento y saneamiento de Londres a la empresa Times Water por un precio simbólico.

Ni el modelo chileno ni el británico se han expandido a otros países. Sin embargo, el modelo francés, mucho más sutil, sí se extiende con el apoyo del Banco Mundial. Aplicando una estrategia de pretendido partenariado público-privado (PPP), se promueven empresas mixtas en las que los grandes operadores transnacionales asumen ser socios minoritarios con un

49% de las acciones, frente al 51% de titularidad pública. Se asegura, no obstante, una cláusula innegociable que establece su competencia exclusiva en la gestión de la empresa mixta, bajo el argumento de disponer del conocimiento y capacidades tecnológicas necesarias. De esta forma, la clave del control acaba residiendo en el monopolio de la información más que en la mayoría accionarial.

Otra cláusula establece que el operador privado, desde la dirección de la empresa mixta, tendrá la potestad de comprar, contratar y subcontratar, sin pasar por concurso público, con lo que la adquisición de tecnología y todo tipo de contratos pasan a adjudicarse directamente a empresas del propio grupo multinacional. Así, en nombre del libre mercado, paradójicamente, colapsan el mercado, asegurándose un lucro que no aflora en los beneficios declarados de la empresa mixta, sino que se enmascara en el capítulo de costes que pagan los ciudadanos a través de tarifas que se disparan.

El poder financiero está transformando la crisis provocada por su codicia en una ventana de oportunidad para sus intereses, apoyándose en políticas públicas de falsa "austeridad". En realidad, privatizar este tipo de servicios equivale a vender el piso en que vivimos. A renglón seguido, tendremos que alquilárselo a quien nos lo compró, pagando la amortización de la compra, más los beneficios que nos quieran imponer. Nada que ver, por tanto, con estrategias de "austeridad", como sería vender la segunda residencia para garantizar lo imprescindible... En nombre de la "austeridad", en realidad, asistimos a un proceso de depredación de valores y derechos sociales, como forma de abrir nuevos espacios de negocio para las grandes corporaciones privadas.

En España, los procesos de privatización al calor de estas políticas (Canal de Isabel II en Madrid, Aguas del Ter-Llobregat en Cataluña, Plan de Saneamiento de Aragón, Servicio de Aguas de Jerez y Puerto de Santa María en Andalucía, entre otros...) están levantando una nueva Marea Azul de indignación, al tiempo que la Red Agua Pública (RAP), en colaboración con la Confederación Europea de Sindicatos, recoge un millón de firmas* en la primera iniciativa ciudadana europea que se pone en marcha en la UE, exigiendo que la gestión del agua salga del espacio del mercado.

*Se puede firmar la Iniciativa Ciudadana Europea en la red: http://www.right2water.eu

Imatge:

* Prof. Emèrit del Dpt. d'Anàlisi Econòmica de la U. de Saragossa

Fitxer baixat de **http://www.terracritica.org**